



Instituto de
Relaciones
Internacionales



orientemedio@iri.edu.ar

Estudios

La lucha por el poder en Egipto después de la elección de Mohamed Mursi.

Ivan Latzke Blake¹

El presente periodo en Egipto estuvo dominado por un fuerte enfrentamiento entre los Hermanos Musulmanes (HM), quienes llegaron al poder a través del Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), y una amplia gama de sectores de la oposición laica, liberal y de izquierda, cuyo mayor exponente fue el Frente de Salvación Nacional (FSN), la principal coalición opositora.

Como candidato del PLJ, Mohamed Mursi llegó al poder en junio del 2012, luego de resultar victorioso en segunda vuelta de las primeras elecciones libres en la historia del país. El contexto en el que asumió estuvo signado por un fuerte enfrentamiento con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), institución que gobernaba provisoriamente el país hasta ese momento, y que se encargó, antes de finalizado el proceso electoral, de realizar una enmienda a la Declaración Constitucional. Esta

¹ Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la cátedra de Sociología de Medio Oriente de Pedro Brieger de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

última reservaba amplias atribuciones para el CSFA, entre las cuales se encontraba la capacidad de legislar hasta la próxima elección legislativa.

En agosto del mismo año, Mursi promulgó un decreto que restablecía en sus funciones al parlamento, el cual había sido disuelto dos meses antes por el Tribunal Constitucional Supremo (TCS). El decreto fue declarado inconstitucional por el TCS, pese a lo cual el Parlamento se reunió con el aval del Presidente, en un claro acto de rebeldía para con la autoridad judicial. Días más tarde, Mursi decidió acatar la determinación del TCS, aunque los seguidores de los HM se manifestaron en la Plaza Tahrir, situada en el centro de El Cairo, con el objetivo de reclamar a los militares que hagan efectiva la entrega del poder legislativo a los civiles. El 13 de agosto el presidente logró anular las enmiendas constitucionales que beneficiaban al CSFA, acumulando en su persona los poderes ejecutivos y legislativos.

A finales del año 2012, las tensiones entre las organizaciones de corte islámica que ostentaban el poder y la oposición laica, se agudizaron. Las manifestaciones de ambos bandos se hicieron cada vez más frecuentes generando fuertes enfrentamientos, cuyo grado de violencia hizo de la pérdida de vidas humanas, parte de la cotidianeidad del país. A finales de noviembre, Mursi promulgó una declaración constitucional que buscaba evitar a los jueces; se otorgó la potestad de cesar al fiscal general, y declaró todas sus resoluciones inapelables y definitivas. Esta medida le valió la oposición del sistema judicial en su conjunto, así como brindó a la oposición laica mayores argumentos para enfrentarlo.

El 1 de diciembre la Asamblea Constituyente le presentó a Mursi el borrador de la nueva Constitución, la cual fue elaborada por un órgano dominado por los HM y grupos islámicos aliados, con un fuerte boicot de los representantes de los partidos laicos, los cuales representaban una pequeña minoría dentro de dicha asamblea. Las manifestaciones en contra del gobierno se vieron incrementadas debido al fuerte rechazo que generó el proyecto constitucional elaborado. La inclusión de la *sharia* como fuen-

te de legislación fue una de las principales críticas que se le realizaron al escrito, así como el hecho de que no se hicieran explícitos los derechos de las mujeres y las minorías, como tampoco garantizaba las libertades sindicales.

El 15 y 22 de diciembre se llevó a cabo, en dos etapas, un referéndum mediante el cual se aprobó, con un 63,8% de los votos, el proyecto de la nueva constitución presentado por la Asamblea Constituyente. La oposición, luego de un primer momento en el que intentó boicotear la elección, llamó a votar negativamente por dicho proyecto. El proceso electoral se vio dificultado debido a la negativa de los jueces a participar en su fiscalización, acusando que el proyecto contenía serios ataques a la justicia. Las denuncias de hechos fraudulentos multiplicaron las manifestaciones y los enfrentamientos, contexto en el cual renunció el Vicepresidente, quien había recomendado aplazar dicho referéndum.

Durante los primeros meses del año 2013 la situación económica de Egipto se fue deteriorando y las protestas sociales, en consecuencia, se intensificaron. Como respuesta a dichas protestas el gobierno apeló a la represión y a la prisión para los manifestantes, así como también convocó a sus partidarios a manifestarse en las calles en apoyo al proyecto.

El 2 de junio, el TCS decidió declarar inválido al Senado y a la comisión que redactó la constitución, declarando inconstitucional la ley que rigió la elección del primero, al igual que los criterios mediante los cuales se seleccionaron los miembros que constituyeron la última, socavando de este modo la legitimidad de la Constitución presentada por los HM, al igual que la del gobierno de Mursi y su proyecto político.

Conmemorándose un año de la llegada al poder del líder del PLJ, a finales del mes de junio, multitudinarias manifestaciones se extendieron por el territorio egipcio, como muestra de apoyo o solicitando la renuncia del mandatario. En este contexto, el FSN emitió un comunicado, denominado Declaración Revolucionaria N° 1, en el cual convocaba a todas las fuerzas revolucionarias y a los ciudadanos en su conjuntos a manifestarse

de manera pacífica hasta conseguir la caída del “régimen”. Asimismo, un movimiento denominado *Tamarrod*, nombre que significa “rebelión” en árabe, aseguraba haber conseguido más de 22 millones de firmas exigiendo la renuncia del presidente Mursi.

Las manifestaciones se tornaron cada vez más masivas, y el FSN le exigió al gobierno su renuncia en un plazo de 48 hs, bajo la amenaza a convocar a la desobediencia civil si esto no se producía. El ejército se sumó a las demandas, realizando un ultimátum por la misma cantidad de tiempo, exigiéndole al gobierno que atienda las demandas de la población y resuelva la crisis, sino se verían ante la obligación de interceder. Mursi se negó a renunciar, aduciendo que faltar a la voluntad popular que lo había llevado al gobierno generaría mayor violencia en la sociedad. Las presiones de la Casa Blanca no se hicieron esperar: la administración Obama exhortó al Presidente egipcio a conformar un nuevo gobierno, y amenazó con suspender la ayuda económica de 1500 millones de dólares que le suministra al país anualmente.

En la noche del día 3 de julio del año 2013, luego de haber desfilado durante la tarde por la El Cairo y haber ocupado lugares estratégicos, y después de que el, hasta ese momento, Presidente Mursi hubiera declarado que no tenía pensado renunciar, las Fuerzas Armadas egipcias anunciaron públicamente que el poder electo había sido derrocado, como así también se encontraban suspendidas la Constitución y el Parlamento. Al frente de la nación, provisoriamente, se nombraba al titular del TSJ, Adli Mansour, y junto a la oposición en su conjunto presentaron una hoja de ruta que buscaba terminar con la crisis política, llamando a elecciones de manera anticipada.

El golpe de Estado perpetuado en Egipto no presenta un futuro promisorio para Egipto y su pueblo. Los enfrentamientos que no pudo zanjar el gobierno islámico durante su año de mandato no parece que puedan terminarse con esta medida, como no parece que sea posible que se pueda terminar por estos medios con una organización que lleva alre-

dedor de un siglo siendo una de las más populares de Egipto, como lo son los Hermanos Musulmanes.

La única certeza que dejan los recientes acontecimientos es el lugar central que ocupa en la política egipcia, como así también en la economía, las Fuerzas Armadas. Desde el derrocamiento del rey Faruk en 1952, hasta el reciente derrocamiento de Mubarak en 2011, sumado a un extraordinario poder económico gracias la exuberante ayuda proveniente de Estados Unidos, y el entrenamiento que reciben de las Fuerzas Armadas de dicho país, dan cuenta de que las Fuerzas Armadas egipcias son un actor determinante en la configuración política, social y económica del país. Otro factor a tener en cuenta es el de las presiones que puede ejercer Washington, bajo la amenaza siempre latente de cortar la ayuda económica, tan necesaria en estos momentos de crisis.